

Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos RIT O-1.482-2022, RUC 2240389396-3, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de diez de agosto de dos mil veintidós, se rechazó la demanda declarativa de relación laboral, despido injustificado y nulo, y cobro de prestaciones, deducida por don Felipe Andree Sallato Jiménez en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas.

El demandante presentó recurso de nulidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante sentencia de tres de julio de dos mil veintitrés.

En contra de esta decisión, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que la materia de derecho propuesta consiste en determinar *“la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios por organismos del Estado en atención a si las funciones desplegadas corresponden o no a los requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si estas se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia”*.

El recurrente sostiene que los servicios que prestó para la repartición demandada fueron ejecutados bajo subordinación y dependencia, excediéndose el marco normativo contenido en el artículo 11 de la Ley N°18.834, puesto que tales funciones eran propias de la institución, según sus fines y criterios, además de continuas y genéricas, observando que permaneció sujeto durante el tiempo que se extendió su contratación a una jornada determinada y horarios, percibiendo, a cambio, una contraprestación regular y periódica, por lo que, en su concepto, resulta aplicable el contenido del Código del Trabajo, tal como se resolvió en los fallos de contraste que acompaña a los que pide se homologue el impugnado.

Tercero: Que para la procedencia del recurso de unificación, es requisito fundamental que existan distintas interpretaciones respecto de una misma materia



de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, por lo que se debe constatar si los establecidos en el pronunciamiento recurrido, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados, son asimilables con los propuestos en los de contraste.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance de la norma que resuelve la controversia, enfrentada a una situación equivalente en una sentencia anterior decidida en términos contrapuestos, interpretación que dependerá del marco fáctico asentado en cada caso.

Cuarto: Que, por lo anterior, es necesario revisar los hechos establecidos en la instancia:

1.- El demandante, don Felipe Sallato Jiménez, ingeniero civil informático, fue contratado a honorarios por el Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, permaneciendo vinculadas las partes, sin solución de continuidad, desde el 31 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

2.- En tales convenciones se reconoció al demandante el derecho a solicitar permisos, feriado legal y a presentar licencias médicas; tenía obligación de asistencia y cumplimiento de jornada, y, para la obtención de sus honorarios, debía emitir la respectiva boleta y un informe mensual de actividades.

3.- Las funciones encomendadas al actor consistieron en la *“incorporación de tecnologías en contenido pedagógico, de innovaciones tecnológicas y de mejoras a los sistemas actuales en directo beneficio de los establecimientos educacionales del Servicio Local de Barrancas, mediante el diseño y monitoreo de acciones que den respuesta a las necesidades de TI de los establecimientos, asegurando la comunicación efectiva con entidades externas como Centros de Innovación, fundaciones, convenios, entre otros, de manera tal de fortalecer las iniciativas tecnológicas que incorporan TICs en el aula. Asimismo, deberá estar disponible ante las necesidades de la dependencia y requerimientos de la Jefatura. Dicha labor será supervisada por la Unidad de TI”*.

Quinto: Que, para la judicatura de la instancia, las labores ejecutadas por el actor fueron accidentales y ajenas a las propias de la repartición demandada, constitutivas, por tanto, de un cometido específico reglado en el artículo 11 de la Ley N°18.834, insertas en la creación de un nuevo servicio público a través de la Ley N°21.040 y la modernización digital de la Administración del Estado, al que resultaba necesario incorporar tecnologías de la información consistentes en la implementación de bases de datos, plataformas y correos electrónicos, observando que la descripción de las actividades consignadas en los respectivos



informes evacuados por el demandante, por su carácter genérico y escueto, no permitían concluir que se excediera el ámbito descrito, en tanto que el reconocimiento de determinados derechos contractuales sólo tuvo por finalidad evitar una vinculación precaria, sin constituir un indicio de laboralidad, advirtiéndose, por último, que dada la emergencia originada por los contagios por COVID-19, muchos organismos optaron por la modalidad de teletrabajo, eximiendo a los empleados de asistir presencialmente.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso deducido por el demandante, fundado en las causales contenidas en los artículos 478 letra c) y 477 del Código del Trabajo, esta última por infracción a lo dispuesto en sus artículos 1, 7 y 8, y al artículo 11 de la Ley N°18.834, por cuanto consideró que ambos motivos de nulidad comparten un supuesto previo que no se cumple en la especie, ya que sus alegaciones se distancian del marco fáctico asentado por la judicatura, al sostener que fue contratado *“para incorporar tecnologías en contenido pedagógico de innovaciones y mejoras en los sistemas en beneficio directo de los establecimientos educacionales del servicio local de Barrancas...; y que su labor era indispensable, estable y permanente en la organización y que durante todo el tiempo estuvo sujeto a jornada y bajo poder de mando”*, lo que contradice al hecho establecido en el fallo impugnado, que consideró que la función desempeñada por aquél consistió en un cometido específico permitido por la Ley N°18.834, concluyendo que es inútil por aquellas causales cambiar o modificar las conclusiones fácticas del juicio.

Sexto: Que, para confrontar el dictamen impugnado, el demandante presentó cinco sentencias dictadas por esta Corte en los autos Rol N°2.995-2018, 1.020-2018, 50-2018, 24.676-2020 y 119.187-2020, de 1 de octubre de 2018 las dos primeras, 6 de agosto del mismo año la tercera, y 26 de octubre de 2021 y 21 de abril de 2022, las restantes.

En el primer fallo se consignaron los siguientes hechos: *“Las partes se vincularon mediante contratos a honorarios entre el 21 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, celebrados en el contexto del Programa de Desarrollo Comunitario de la Dirección pertinente (DIDECO). -En virtud de los cuales, el actor debía entregar mensualmente un informe al director encargado de la unidad supervisora, con la respectiva boleta de honorarios, recibiendo como contraprestación por sus servicios, un estipendio mensual de \$1.029.896.- Se desempeñó como ‘gestor territorial’, debiendo cumplir horario fijo y jornada laboral, debiendo rendir cuenta de sus funciones, de carácter permanentes, que se ejercen en todas las municipalidades del país”*; decidiéndose, a continuación, que *“los servicios prestados por la actora, además de no coincidir con el marco*



regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, surgiendo indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, ligada a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración, en condiciones que no pueden considerarse como sujetas a las características de especificidad que señala dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral, coherente con los elementos de convicción presentado por las partes, de los que fluye una relación de subordinación y dependencia, en el marco de una prestación de servicios personales, a cambio de una remuneración periódica, lapso en el cual existió jornada de trabajo, control de horario y asistencia”.

En la segunda sentencia se comprobó que “Las partes se vincularon a partir del 2 de junio del 2013 y hasta el 28 de febrero de 2017 mediante sucesivos contratos a honorarios para cumplir funciones de asistente social en el programa ‘Entidad Patrocinadora, EP y Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, Oficina de la Vivienda’. -El actor era parte de dicha entidad, prestando funciones de atención de público y elaboración de diagnósticos sociales, que debía ejecutar en un horario determinado y en el cumplimiento de una jornada, con obligación de asistencia, sujeto a la dependencia e instrucciones de jefaturas y pago mensual de la debida contraprestación. -Todo ello, en el contexto de un convenio celebrado por la Municipalidad demandada con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, por el cual se autoriza a la demandada para actuar como entidad patrocinante”; decidiendo, a continuación, que “es claro que corresponden a circunstancias que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta, tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración. Inferencia que obtiene mayor fuerza si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N°18.883, desde que el ejercicio de labores que se extienden durante casi cuatro



años y en las condiciones señaladas, no pueden considerarse como sujeta a las características de especificidad que señala dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral”.

En la tercera sentencia se acreditó que “Las partes se vincularon mediante sucesivos contratos a honorarios a partir del 1 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2016, en el contexto de una serie de convenios de transferencia de fondos celebrados por la demandada y el FOSIS para los programas que indica. -En tal desempeño, la actora prestó servicios de asesoría y atención de público y de casos sociales como asistente social, cumpliendo diversas funciones, entre ellas, la de revisora de ficha social, de digitadora de ficha de protección social, como asesora laboral, y, finalmente, como asesora familiar. -Por dichos servicios percibía mensualmente una contraprestación en dinero, denominada honorario, mediante liquidación de remuneración-honorario de la que se le retenía el 10%, siendo la última por la suma de \$909.824.- La actora estaba sujeta a jornada de 44 horas semanales, con sistema de control y registro de horario y asistencia, bitácora diaria, derecho a licencias, feriado y otros beneficios”; resolviendo, a continuación, que “es claro que los servicios prestados por la actora, además de no coincidir con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, surgiendo indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración. Tal conclusión adopta mayor vigor si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide estimar que se desarrollaron conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N°18.883. En efecto, el desempeño durante más de ocho años y en las condiciones señaladas en el razonamiento cuarto que antecede, no puede considerarse que participa de la característica de especificidad que señala dicha norma, o que se desarrolló en la condición de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral”.

En la cuarta sentencia, se tuvo presente para acoger la demanda que “los servicios prestados por la actora no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y que, por el contrario, se ajustan al propio de un



vínculo laboral, teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores desempeñadas no corresponden a un cometido específico, dadas su extensión temporal, superior a cinco años, la amplitud de sus tareas de coordinación y asesoría, y, principalmente, porque se refieren a actividades propias y permanentes del servicio en cuestión, puesto que aun cuando se haya establecido que existieron programas puntuales para la protección del adulto mayor contra el maltrato y para el mejoramiento de sus vínculos con la comunidad, es claro que sus objetivos coinciden y se corresponden plenamente con la finalidad para la cual fue instaurado el Servicio, referidas justamente a la protección e integración de ese sector de la población, lo que obsta a que tareas como las descritas y ejecutadas en las condiciones mencionadas en el razonamiento sexto que antecede, puedan considerarse que participan de la especificidad que señala dicha norma, o que se desarrollaron en la condición de temporalidad que indica”.

Finalmente, en el quinto fallo acompañado se tuvo presente para dar lugar a la demanda, que “*el demandante se incorporó formalmente a la dotación del órgano demandado bajo la modalidad contemplada en el artículo 11 de la Ley N°18.834, puesto que el Servicio Nacional de Turismo de la Región del Maule contrató a honorarios a don Daniel Antonio Paredes Paredes, de acuerdo con los decretos que dictó, desde el 3 de agosto de 2015 al 1 de marzo de 2019, quien, no obstante, en la práctica, prestó servicios sin que concurrieran los requisitos de temporalidad y especificidad que esa norma exige, puesto que se extendieron, en total, por tres años y algo más de seis meses, ejerciendo funciones propias del organismo demandado, consistentes en el desarrollo, promoción y fomento del turismo regional, sometiéndose a las instrucciones impartidas por el director del servicio, sujeto a jornada, con obligación de registrar su asistencia en el libro respectivo, desde el primer al último día en que las partes permanecieron vinculadas y percibiendo, a modo de contraprestación, una suma de dinero mensual, denominada honorarios*”; agregando a continuación que, “*de la enumeración de las funciones encomendadas al demandante en cada uno de los contratos suscritos con el organismo demandado, se advierte que cumplió labores que por ley se deben ejecutar regularmente por éste, no obstante que se aluda, como precisión, que correspondía a un determinado programa y que su financiamiento provenía de un organismo regional diverso al recurrido, puesto que su finalidad fue la de fortalecer permanentemente el capital humano de los servicios turísticos del Maule y, por tanto, útil al propósito normativo encomendado por el legislador al Servicio Nacional de Turismo, tal como fueron explicitadas en las respectivas cláusulas*”.



Séptimo: Que el artículo 11 de la Ley N°18.834 permite a la Administración contratar a honorarios como un mecanismo a través del cual puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, siempre que se trate de funciones ocasionales, específicas, puntuales y no habituales.

De este modo, corresponde a una modalidad de prestación de servicios particulares que no confiere a quien los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto excedan o simplemente no coincidan con los términos que establece la normativa citada, revelando caracteres propios del vínculo laboral sujeto al Código del Trabajo, será este cuerpo normativo el que rijan, por no enmarcarse las actividades convenidas en la hipótesis estricta contemplada en tal disposición.

Octavo: Que de acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia de la instancia y los razonamientos contenidos en las de contraste, se advierte que aquella presenta una particularidad distintiva, por cuanto el actor fue contratado para llevar a cabo una labor ajena a la que es propia del organismo recurrido según la definición contenida en el artículo 3 de la Ley N°21.040, puesto que su desempeño fue requerido a propósito de la instalación de la nueva estructura educativa y sólo para implementar determinadas tecnologías, tal como fue consignado en la cláusula correspondiente de los dos contratos suscritos por las partes, sin intervenir en funciones docentes o en servicios que una vez realizados requirieran necesariamente su intervención constante, aspecto que tampoco fue acreditado; advirtiéndose que en los dictámenes acompañados se verificó el carácter permanente de los trabajos desarrollados en cada caso por los demandantes en unidades municipales estables o en dependencias del Servicio Nacional del Adulto Mayor o del Servicio Nacional de Turismo, antecedente que, junto a otros que fueron comprobados, motivó la conclusión de haberse excedido el marco normativo que posibilitó la vinculación a honorarios.

Noveno: Que no resulta suficiente para sobrepasar el marco estatutario y radicar la decisión en las normas laborales la sola referencia a instrucciones impartidas por una jefatura que supervisaba el desempeño del actor, puesto que se trata de una afirmación vaga o genérica sin referencias concretas acerca de su intensidad práctica para conocer en qué sentido fueron determinantes en la subordinación de su voluntad, conclusión que, asimismo, excluye el análisis comparativo con las sentencias acompañadas, en las que tal elemento quedó debidamente asentado.

Décimo: Que, en consecuencia, es claro que los servicios prestados por el actor son coincidentes con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, sin



evidenciarse elementos que revelen la existencia de un vínculo laboral, por cuanto llevó a cabo una función acotada asociada a su profesión, restringida en el tiempo y referida a determinadas actividades encomendadas a propósito de la implementación de determinados servicios tecnológicos, antecedente que motivó y condicionó su vinculación con la demandada.

Undécimo: Que habiéndose constatado que los supuestos fácticos y los fundamentos de derecho consignados en la sentencia impugnada no son asimilables con los que se contienen en las acompañadas, el arbitrio examinado será desestimado.

Por estas consideraciones y normas citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante contra la sentencia de tres de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Acordada con el voto en contra de la abogada integrante señora Rojas, por cuanto las sentencias acompañadas cumplen suficientemente el requisito de disparidad jurisprudencial para llevar a cabo la labor de comparación que exige el intento uniformador.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°183.394-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., ministra suplente señora Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. No firma la ministra suplente señora Quezada y la abogada integrante señora Lathrop, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

